



TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
AUTO DE INTERLOCUTORIO No189B

Santiago de Cali, treinta y uno (31) de agosto de dos mil veinte (2020)

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD ELECTORAL. PRIMERA INSTANCIA
DEMANDANTE:	GUSTAVO ADOLFO PRADO CARDONA Y OTROS
DEMANDADOS:	CONSUELO CIFUENTES SÁNCHEZ Y OTROS
PROCESO:	76001-23-33-000-2019-01177-00
ASUNTO:	AUTO INTERLOCUTORIO. RESUELVE EXCEPCIONES PREVIAS A LA LUZ DEL DECRETO 806 DE 2020

Aprobado en Sala virtual y Acta de la fecha. Convocatoria virtual No 19 del 31° de agosto de 2020

I. ANTECEDENTES

La parte demandante, actuando en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, pretende la nulidad de los actos de elección proferidos por el Consejo Nacional Electoral: Formulario E8 CON, lista definitiva de candidatos al Concejo Municipal de Tuluá, Valle del Cauca, inscrita por el partido Unidad Nacional Partido de la U; Formulario E26 CON, Acta del escrutinio general de los votos depositados para el Concejo Municipal de Tuluá; y, Acta de elección de los concejales Consuelo Cifuentes Sánchez, Diego Fernando Suaza Otálvaro, Sulay Córdoba Rangel, Javier Jaramillo Giraldo y Robinson Rengifo Rodríguez del Municipio de Tuluá, Departamento del Valle del Cauca, periodo 2020-2023.

La demanda fue radicada en la oficina de reparto el 13 de diciembre de 2019 (Fl. 117); mediante auto interlocutorio sin número del 18 de diciembre de 2019 se admitió (Fls. 118-120 C. 1).

Al demandando Partido de la U, no se le notificó el auto admisorio; no obstante, el 4 de febrero del mismo año, el representante legal contestó la demanda vía e mail mediante escrito visible del folio 140-145 Ibidem, por lo que se dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 301 del CGP, aplicable por remisión de los 296 y 306 del CPACA; a los demandados Consuelo Cifuentes Sánchez, Diego Fernando Suaza Otálvaro, Sulay Córdoba Rangel, Javier Jaramillo Giraldo, y Robinson Rengifo Rodríguez, se les notificó por Aviso librado el 13 de enero de 2020 (Fl. 129 Ibidem); la publicación se surtió el 2 de febrero de 2020 (Fls. 137-138 Ibidem), corriendo el término para la contestación del 13 de febrero al 4 de marzo¹ (Fl. 218). Contestaron la demanda el 27 de febrero de 2020 (Fls. 277-296), es decir, dentro del término legal.

Al Consejo Nacional Electoral, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público se les notificó el 19 de diciembre de 2019 (Fl. 121), corriendo términos para contestar para las dos primeras del 16 de

¹ Transcurre el término de 5 días de que habla el literal c) del numeral 1 del artículo 277 del CPACA (del 3 al 7 de febrero) y luego se dejan pasar los 3 días de que habla el literal f) Ibidem (10 al 12 de febrero)

enero al 7 de febrero de 2020²; el Consejo Nacional Electoral contestó la demanda el 6 de febrero de 2020; no obstante, como no se acreditó personería adjetiva de quien dice ser apoderada de la entidad, no se entiende contestada (Fls. 263-266 C. 1). La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no contestó la demanda.

El traslado de las excepciones propuestas se surtió el 5 de marzo de 2020 (Fl. 312); corrió los días 6, 9 y 10 (Fl. 313) sin pronunciamiento alguno de la contraparte³.

II. CONSIDERACIONES

Mediante decretos 417 del 17 de marzo y 637 del 6 de mayo de 2020 el Gobierno Nacional dispuso “*el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional*”, con ocasión de la pandemia declarada por la OMS por motivo de la Covid-19, razón por la que el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020 “*Por el cual se complementan las medidas transitorias de salubridad pública adoptadas mediante el Acuerdo 11517 de 2020*” dispuso que los funcionarios y empleados judiciales trabajen desde sus casas, por lo que se hace necesario adelantar todas las actuaciones que se deriven de esta providencia a través de los medios electrónicos, como lo contempla el artículo 186 del CPACA.

Por Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020 se levantó la suspensión de términos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura entre el 16 de marzo y el 31 de junio de 2020⁴.

De otro lado, el Gobierno Nacional expidió el 4 de junio de 2020, el decreto legislativo No 806⁵, donde, entre otras consideraciones, señaló:

“(…) Que igualmente, es importante crear disposiciones que agilicen el trámite de los procesos judiciales y permitan la participación de todos los sujetos procesales, contrarrestando la congestión judicial que naturalmente incrementó la suspensión de los términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura con fundamento en la emergencia sanitaria.

Que, por lo anterior, es necesario **crear un marco normativo que se compadezca con la situación actual que vive el mundo y especialmente Colombia, que perdure durante el estado de emergencia sanitaria**, y que establezca un término de transición mientras se logra la completa normalidad y aplicación de las normas ordinarias.

Que este marco normativo **procurará que por regla general las actuaciones judiciales se tramiten a través de medios virtuales y excepcionalmente de manera presencial**. Por lo que se debe entender que las disposiciones de este decreto complementan las normas procesales vigentes, las cuales seguirán siendo aplicables a las actuaciones no reguladas en este decreto.

(…)

² Luego se dejan pasar los 3 días de que habla el literal f) Ibidem (10 al 12 de febrero).

³ Se pronunció extemporáneamente el 11 de marzo de 2020 (Fls. 314-328)

⁴ Por Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526 y PCSJA20-11529 de marzo de 2020; PCSJA20-11532, PCSJA20-11546 de abril de 2020; y PCSJA11547, PCSJA20-11556 y PCSJA20-11549 de mayo de 2020 dispuso suspender los términos de las actuaciones judiciales salvo algunas excepciones.

⁵ Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Que estas medidas, se adoptarán en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición de este decreto (...). (Resalta la Sala).

En esta secuencia, el artículo 12 dispone:

“Artículo 12. Resolución de excepciones en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. De las excepciones presentadas se correrá traslado por el término de tres (3) días en la forma regulada en el artículo 110 del Código General del Proceso, o el que lo sustituya. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre ellas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en las excepciones previas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 Y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juzgador las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva se tramitarán y decidirán en los términos señalados anteriormente.

La providencia que resuelva las excepciones mencionadas deberá ser adoptada en primera instancia por el juez, subsección, sección o sala de conocimiento. Contra esta decisión procederá el recurso apelación, el cual será resuelto por la subsección, sección o sala del tribunal o Consejo de Estado. Cuando esta decisión se profiera en única instancia por los tribunales y Consejo de Estado se decidirá por el magistrado ponente y será suplicable.

Si bien el artículo 283 del CPACA no indica de manera expresa la resolución de excepciones previas en el marco del proceso de nulidad electoral, lo cierto es que la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado ha indicado que: *“...el juez electoral en aplicación del principio de integración normativa, puede y debe pronunciarse en la audiencia inicial sobre las excepciones previas propuestas por las partes”*⁶.

En este orden, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto 806 de 2020 analizado en precedencia, esta Sala de Decisión Mixta se pronunciará sobre las excepciones previas propuestas.

Caso concreto:

⁶ Auto de Sala del 18 de febrero de 2016, radicación 25000-23-41-000-2015-00101-02 CP. Alberto Yepes Barreiro

La parte demandada Consuelo Cifuentes Sánchez, Diego Fernando Suaza Otálvaro, Sulay Córdoba Rangel, Javier Jaramillo Giraldo, y Robinson Rengifo Rodríguez, propusieron como excepción previa la que denominaron inepta demanda; en primer lugar, porque no se determinó cuál o cuáles de las causales de nulidad establecidas en los artículos 137 y 275 del CPACA sustentan la solicitud de nulidad electoral, máxime cuando en materia contenciosa rige el principio de justicia rogada; y en segundo lugar, por demandarse como pretensión directa la nulidad de un acto preparatorio o de trámite como lo es el formulario E-8CON pues solo los actos definitivos que ponen fin a una actuación administrativa son susceptibles de producir consecuencias anulatorias (Fls. 281-282 C.1).

Con respecto a la indeterminación de la causal de nulidad deprecada, es preciso señalar tal falencia no existe para la sala, porque la parte demandante claramente en la demanda manifestó que en razón que la conducta irregular no se enmarcaba en las taxativamente señaladas en el artículo 275 debía acudir al artículo 137 del CPACA por remisión expresa de aquel; en este orden, el demandante finca su cargo en que el aval otorgado por el Partido de la U a los candidatos al Concejo Municipal de Tuluá e hizo por quien no fungía como Representante Legal y en su sentir ello constituye una infracción de las normas constitucionales (Fls. 3 y 4 C. 1).

Ahora bien, la Sala considera que sí existe una inepta demanda frente a la solicitud de nulidad de los Formularios E-6⁷ y E-8⁸ (Fls. 105-108) pues son actos de trámite no pasibles de control jurisdiccional; el artículo 275 del C.P.A.C.A., señala que los actos de elección son nulos en los eventos previstos en el artículo 137⁹ de la ley 1437 de 2011 y los formularios demandados si bien contienen las listas definitivas de candidatos a la elección de concejales del municipio de Tuluá, 2020 – 2023, no son actos de elección, son actos de trámite que relacionan quienes fueron los candidatos inscritos por cada partido, por eso debe atacarse es el acto definitivo que lo es, el formulario E-26.

En esta secuencia, y de conformidad con la Jurisprudencia del H. Consejo de Estado¹⁰, el acto electoral es aquel por medio del cual la administración declara una elección o hace un nombramiento o una designación; y, el acto de contenido electoral es aquellos que tienen la virtualidad de influir en la decisión de elección más no es el que declara la elección en sí misma.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: APLICAR al proceso las disposiciones del Decreto Legislativo 806 de 2020 en la forma dispuesta en la parte motiva de este auto.

⁷ E-6 Acta de solicitud y aceptación de inscripción de candidatos. <https://www.registraduria.gov.co/Conozca-el-glosario-de-los.html>

⁸ E-8 Confirmación de listas de candidatos. <https://www.registraduria.gov.co/Conozca-el-glosario-de-los.html>

⁹ **ARTÍCULO 137. NULIDAD.** Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió...”

¹⁰ Sección Quinta, Sentencia del 17 de septiembre de 2018, C.P. Rocio Araújo Oñate, Radicado No 11001-03-28-000-2018-00134-00

SEGUNDO: Tener por contestada la demanda por parte del Partido de la Unidad Nacional, y, Consuelo Cifuentes Sánchez, Diego Fernando Suaza Otálvaro, Sulay Córdoba Rangel, Javier Jaramillo Giraldo, y Robinson Rengifo Rodríguez. Téngase por no contestada la demanda por parte del Consejo Nacional Electoral y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

TERCERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de inepta demanda respecto de la solicitud de nulidad de los formularios E-6 y E-8 como actos no pasibles de control jurisdiccional por lo expuesto en precedencia.

CUARTO: DECLARAR no probada la excepción de inepta demanda propuesta, en relación con la falta de determinación de la causal de nulidad invocada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

QUINTO: Se reconoce personería al abogado Armando González, identificado con la C.C. No 14'977.958 de Cali (Valle), y T.P. No 108.025 del C.S. de la J., como apoderado judicial de los concejales demandados, en los términos y fines indicados en los poderes que obran a folios 308 y 310.

SEXTO: No se reconoce personería a la abogada Angélica María Portilla Barco, identificada con la C.C. No 1'094.241.058 y T.P. No 196.856 del C.S. de la J., como apoderada judicial del Consejo Nacional Electoral debido a que no aparece la documental que acredite su condición de Profesional Universitario Especializada adscrita a la Oficina Asesora Jurídica y Defensa Judicial de la entidad ni el acto de delegación.¹¹

SÉPTIMO: Se reconoce personería al abogado Álvaro Echeverri Londoño, identificado con la C.C. No 10'255.488 y T.P. No 94.461 del C.S. de la J., quien ostenta la Representación legal del Partido de Unidad Nacional, en adelante "Partido de la U", como apoderado judicial del Partido, en los términos y fines indicados en el literal c) del artículo 35 de los Estatutos del Partido (folio 42 C. 1), y Resoluciones No 024 del 15 de noviembre de 2017 y 2954 del 29 de diciembre de 2017 (Fls. 224-225 y 148-151 Ibidem).

OCTAVO: NOTIFÍQUESE la presente providencia por estado electrónico, en atención a lo dispuesto por el artículo 9° del Decreto 806 de 2020.

NOVENO: Para efecto de notificaciones y/o comunicaciones, se tendrán en cuenta las direcciones electrónicas y físicas que obran en el expediente, así: parte demandante: pradoabogado23@hotmail.com parte demandada: Consuelo Cifuentes Sánchez, Diego Fernando Suaza Otálvaro, Sulay Córdoba Rangel, Javier Jaramillo Giraldo, y Robinson Rengifo Rodríguez: argon.51@hotmail.com y armagon51@hotmail.com; Consejo Nacional Electoral: cnenotificaciones@cne.gov.co, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado: procesosnacionales@defensajuridica.gov.co, Concejo Municipal de Tuluá: concejo@tulua.gov.co Ministerio Público: procjudadm20@procuraduria.gov.co

De conformidad con el artículo 2 del Decreto 806, el canal oficial de comunicación e información para recibir memoriales es el correo electrónico: rppmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co

¹¹ No obra poder, ni acto de delegación, solo llegó la contestación sin documental que acredite la calidad del poderdante (Fls. 263-266)

DÉCIMO: Ejecutoriada la presente providencia, ingrese nuevamente el expediente al despacho para lo pertinente.

Providencia discutida y aprobada en Sala Virtual de la fecha, según consta en acta que se entrega a la Secretaría de la Corporación por medios virtuales, atendiendo las circunstancias de salubridad pública que se presentan en el país a raíz del COVID-19.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ZORANNY CASTILLO OTALORA
Magistrada



ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES
Magistrada



VÍCTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ
Magistrado